



CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD  
Y POLÍTICA SOCIAL



**UNIÓN EUROPEA**  
Fondo Social Europeo  
El FSE invierte en tu futuro  
Financiado como parte de la respuesta de  
la Unión a la pandemia de COVID-19

**Exp: AM-005/2022**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Luisa Guerrero Tramoyeres, Técnico de apoyo a la Contratación, como Secretaria de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al Acuerdo Marco denominado **“ACOMPANIAMIENTO EDUCATIVO Y ALOJAMIENTO PARA JÓVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020, FONDOS REACT-UE**

### **CERTIFICO:**

Que la Mesa de Contratación en su reunión del día 19 de julio de 2022, ha acordado excluir la oferta de CREA ESPAÑA CENTRO DE RECURSOS PARA ASOCIACIONES Y AYUNTAMIENTOS (G98615115) por los siguientes motivos:

Por no acreditar la aptitud para ser adjudicatario del presente contrato. En este sentido el artículo 66.1 de la LCSP establece que *“Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios prestaciones objeto del contrato que se licita se encuentren entre los fines establecidos en los estatutos de la citada entidad”*. En aplicación de este artículo la mesa de contratación considera que prestaciones objeto del acuerdo marco que se licita no se encuentra entre los fines establecidos en los estatutos de la citada entidad.

El objetivo general de este acuerdo marco es ofrecer alojamiento y atención integral a jóvenes mayores de edad que hayan tenido una medida de protección y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social, por carecer de apoyos familiares o por no contar con un nivel de autonomía personal ni económica suficiente para vivir de forma independiente, con el fin de favorecer la transición a un proyecto de vida autónoma y prevenir el riesgo de exclusión social. Y que respondan al siguiente perfil:

- a) Edad: de 18 a 21 años.
- b) Sexo: masculino/femenino.
- c) Procedentes de medida de protección adoptada por la Comunidad de Madrid o de atención inmediata según establece el artículo 14 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- d) Jóvenes que, habiendo sido tutelados por la administración por su situación de desprotección como menores, alcanzan la mayoría de edad sin contar con recursos suficientes para vivir de manera autónoma y manifiestan su compromiso de participación activa y aprovechamiento de los recursos puestos a su disposición.

Para alcanzar el objetivo, se utiliza un enfoque holístico actuando simultáneamente sobre diferentes áreas:

Área residencial: Proporcionar alojamiento y manutención, acompañado de un entrenamiento para la adquisición de habilidades domésticas y convivenciales.

Área educativa: Adquisición de habilidades sociales, talleres grupales para aprendizaje en educación para la salud, ahorro, etc., organización actividades de ocio, deportivas, culturales, entre otras.

Área formativo-laboral: coordinación con otros agentes para su incorporación a recursos formativos, laborales y sociales, asesoramiento para la capacitación social e incorporación laboral orientada a la autonomía personal, etc.

De la descripción señalada anteriormente queda evidenciado que los fines de la entidad citada no encajan con el objeto del contrato pues dejan fuera tanto a posibles beneficiarios como la mayoría de los ámbitos de actuación.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **12025830408869898847**

Tampoco se puede tener en cuenta la modificación estatutaria realizada por la entidad con el objeto de ampliar los fines fundacionales. Según consta en la documentación aportada por CREA, el día 28 de junio de 2022 se celebró la Asamblea General Extraordinaria para la ampliación de los fines fundacionales de la entidad. Debemos poner de manifiesto que el artículo 140.4 de la LCSP establece que *“Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.”* Por tanto, habiendo sido el 31 de mayo de 2022 el fin del plazo de presentación de ofertas y, en aplicación del artículo citado, la ampliación de los fines fundacionales no puede servir para acreditar la aptitud del licitador para concurrir a este contrato.

Contra el presente acto de trámite, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a fecha de firma

EL PRESIDENTE DE LA MESA  
Vº. Bº.

LA SECRETARIA DE LA MESA

